
0021-PE-02

Buenos Aires, 17 de abril de 2002.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, a fin de someter el presente proyecto de ley que modifica la ley 24.522 y la 25.563 que reformara aquélla.

Hacia fines del año pasado, nuestro país atravesaba una dramática situación que se trasladó a una crisis institucional que concluyera con los cambios en el ejercicio de la más alta investidura de la Nación, circunstancia bajo la cual asumiera el actual gobierno con el apoyo de ese Honorable Congreso de la Nación.

En tales circunstancias, fue sancionada la ley 25.561 que estableciera la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, hasta el 10 de diciembre de 2003, que dispusiera la salida del régimen de convertibilidad y delegara un conjunto de facultades al Poder Ejecutivo nacional, en función de acelerar la adopción de medidas dirigidas a remontar la grave crisis.

En el marco de la crítica situación descrita, ese Honorable Congreso también dictó la ley 25.563, estableciendo por idéntico período, la emergencia productiva y crediticia, orientada a contener la situación coyuntural que afectaba a las empresas endeudadas, disponiendo a tal efecto, cláusulas transitorias que modificaban la ley concursal y prorrogara términos y plazos de procedimientos y obligaciones.

En virtud de las facultades que le fueron delegadas y con el objetivo de remover las causas condicionantes de la crisis, el Poder Ejecutivo nacional, en esta instancia, dispuso un conjunto de normas tendientes a pesificar la economía, y establecer nuevas bases para los contratos en curso y las obligaciones emergentes.

Durante estos meses, el gobierno nacional ha encarado la reformulación de políticas y programas públicos, tales como el nuevo pacto fiscal entre la Nación y las provincias, la búsqueda del equilibrio fiscal, la renegociación de las tarifas de los servicios públicos, el proceso de renegociación de la deuda externa, etcétera.

Paralelamente, es preciso afrontar en forma simultánea la adopción de otras medidas complementarias que posibiliten establecer nuevas bases de entendimiento entre los diferentes actores económicos.

Para tales objetivos, se están llevando adelante gestiones para lograr acuerdos muy importantes con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales de crédito, lo cual resulta indudablemente necesario para favorecer el proceso de recuperación de las condiciones económicas y financieras para el desenvolvimiento de nuestro país y su inserción en la comunidad internacional.

Dichas tratativas contienen aspectos de suma trascendencia para el sector público, como también para el conjunto de los actores económicos del sector privado.

En tal sentido, se encuentra conveniente revisar las medidas de excepción contenidas en la ley 25.563, entendiendo que el establecimiento de normas que procuren posibilitar el equilibrio de los intereses de los actores económicos, constituye un factor importante para la recuperación de la actividad económica y financiera, y por ende, para ampliar las condiciones de empleabilidad y los niveles de ingresos de la población en general.

Debe privilegiarse más aún la búsqueda de dichos equilibrios, cuando se producen situaciones de crisis empresarias, tal como las que regula el régimen concursal, basado en la ley 24.522 y que fuera modificado transitoriamente por la ley 25.563.

La ley 24.522 es de fundamental importancia institucional y económica dado que ella tiene como objetivo directo, en una economía de mercado, tratar de distribuir el riesgo entre los

distintos participantes del proceso económico, tratando que ella sea previsible, equitativa y transparente, todo ello dentro de un marco de equidad que los jueces deben tratar de encauzar en un proceso de crisis que vincula a las distintas partes, con las libertades y restricciones propias de la actividad de cada uno de los componentes.

Por tales motivos, en el proyecto que se eleva a vuestra consideración, se reincorporan los plazos y normas propias de la ley 24.522 y también el importante instituto del *cramdown*, que había sido derogado por el artículo 21 de la ley 25.563 y que es una alternativa importante de recupero de empresas en crisis, facilitando el repago de los créditos a los acreedores y evitando los importantes costos económicos e institucionales propios de la quiebra.

Quiebra, que en el estado actual de la actividad económica implica la pérdida de los activos intangibles, como el conocimiento y la capacitación del personal dedicado a la actividad de la empresa deudora, que son de los más importantes dado que implican pérdidas que nunca se recuperan y que afectan el nivel de vida de la población general de nuestro país.

Consecuencia de ello es el restablecimiento de los artículos concordantes con esa norma.

Se modifica el artículo 52 de la ley 24.522, y se recupera la facultad homologatoria del juez, con criterio de valoración, e incluso se le permite imponer la propuesta concursal cuando ella es equitativa y no discrimina irrazonablemente contra un acreedor, clase o categoría en la que no se logró conformidad suficiente, atendiendo y efectivizando así el principio de equidad y de sacrificio compartido, que vincula a las partes en este tipo de procesos.

Esta norma guarda concordancia con anteriores proyectos, elaborados en nuestro país por distintas comisiones, tales como los proyectos elaborados por las comisiones del Ministerio de Justicia, mediante resoluciones 379/91 y 89/97 y similares de otros países como, por ejemplo, el Bankruptcy Code, en su parágrafo 1.129 b) de los Estados Unidos de América, entre otros. Y que son aconsejados por los organismos de financiamiento internacional, como un criterio tendiente a mejorar los costos de negociación de las partes y eliminando incentivos a adoptar criterios individualistas y propiciando acuerdos de cooperación entre acreedor y deudor.

Se derogan los plazos previstos originariamente en los artículos 9º y 11 y otros se reacomodan al 30 de junio de 2002, a los efectos de que las partes puedan comenzar a reordenar la actividad económica que se encuentra en un estado de espera general.

Se deroga la limitación de las garantías que se estableció en el artículo 55 y se deroga la suspensión de la ejecución de garantías de obligaciones financieras que permiten la transferencia de control de las sociedades concursadas o sus subsidiarias, que se encontraba en el artículo 8º segundo párrafo de la ley 25.563, dado que ello afecta, fundamentalmente, el régimen crediticio de la pequeña y mediana empresa, debido a que el mercado crediticio es un todo en el cual el sistema de garantías vigentes es fuente de existencia de recursos y de la búsqueda de baja de interés de los capitales.

Toda medida contraria afectará el financiamiento de las empresas y de la economía en general, dado que se afecta instrumentos necesarios donde se sustenta el crédito comercial.

Pensamos que de esta manera nuestro país comienza una tarea de encauzamiento de las relaciones económicas internas, lo que hará que se proteja y maximice el valor de las empresas, beneficiando a todas las partes y a la economía en general.

Asimismo y como consecuencia de ello, se brinda una clara señal al mundo de que la Argentina se encuentra dispuesta a reordenar su actividad económica interna, respetando los derechos de la propiedad de las partes, con el lógico sacrificio que la hora reclama y que los argentinos estamos asumiendo, pretenden asegurar para el futuro que nuestro país asegure el fiel compromiso de las obligaciones pactadas.

Sin perjuicio de la importancia que adquiere la consideración del presente proyecto por parte de ese Honorable Congreso, debe ponerse de manifiesto que en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encuentra trabajando una comisión de trabajo, integrada

por notables juristas de nuestro país, que se encuentra elaborando un proyecto de revisión integral del régimen concursal, teniendo como base de su labor, los importantes avances alcanzados en dicha materia por el derecho comparado más moderno, así como también las recomendaciones emanadas de importantes congresos e instituciones de prestigio que han tratado esta cuestión.

Dicho trabajo de elaboración del proyecto de fondo sobre la modificación integral de la ley de fondo, que espera concluirse en los próximos meses, será girado por el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación para su consideración.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Mensaje 629

Eduardo A. Duhalde

Jorge M. Capitanich. – Jorge R. Vanossi.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley:

Artículo 1º – Derógase el artículo 2º de la ley 25.563 y restablécese el texto del artículo 43 de la ley 24.522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 43: *Período de exclusividad. Propuestas de acuerdo.* Dentro de los treinta (30) días desde que quede notificada por ministerio de la ley la resolución prevista en el artículo anterior, o dentro del mayor plazo que el juez determine en función al número de acreedores o categorías, el que no podrá ser superior a sesenta días, el deudor gozará de un período de exclusividad para formular propuestas de acuerdo preventivo por categorías a sus acreedores y obtener de éstos la conformidad según el régimen previsto en el artículo 45. Las propuestas pueden consistir en quita, espera o ambas; entrega de bienes a los acreedores; constitución de sociedad con los acreedores quirografarios, en la que éstos tengan calidad de socios; reorganización de la sociedad deudora; administración de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores; emisión de obligaciones negociables o debentures; emisión de bonos convertibles en acciones; constitución de garantías sobre bienes de terceros; cesión de acciones de otras sociedades; capitalización de créditos, inclusive de acreedores laborales, en acciones o en un programa de propiedad participada, o en cualquier otro acuerdo que se obtenga con conformidad suficiente dentro de cada categoría, y en relación con el total de los acreedores a los cuales se les formulará propuesta.

Las propuestas deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categoría, pudiendo diferir entre ellas. El deudor puede efectuar más de una propuesta respecto de cada categoría, entre las que podrán optar los acreedores comprendidos en ellas. El acreedor deberá optar en el momento de dar su adhesión a la propuesta.

La propuesta no puede consistir en prestación que dependa de la voluntad del deudor. Si consiste en una quita, aun cuando contenga otras modalidades, el deudor debe ofrecer, por lo menos, el pago del cuarenta por ciento de los créditos quirografarios anteriores a la presentación. Este límite no rige para el caso de supuestos especiales previsto en el artículo 48.

Cuando no consiste en una quita o espera, debe expresar la forma y tiempo en que serán definitivamente calculadas las deudas en moneda extranjera que existiesen, con relación a las prestaciones que se estipulen.

Los acreedores privilegiados que renuncien expresamente al privilegio, deben quedar comprendidos dentro de alguna categoría de acreedores quirografarios. La renuncia no puede ser inferior al treinta por ciento de su crédito. A estos efectos, el privilegio que proviene de la relación laboral es renunciable, debiendo ser ratificada en audiencia ante el juez del concurso, con citación a la asociación gremial legitimada. Si el trabajador no se

encontrare alcanzado por el régimen de convenio colectivo, no será necesaria la citación de la asociación gremial. La renuncia del privilegio laboral no podrá ser inferior al veinte por ciento del crédito, y los acreedores laborales que hubieran renunciado a su privilegio se incorporarán a la categoría de quirografarios laborales por el monto del crédito a cuyo privilegio hubieran renunciado. El privilegio a que hubiere renunciado el trabajador que hubiere votado favorablemente el acuerdo renace en caso de quiebra posterior con origen en la falta de existencia de acuerdo preventivo, o en el caso de no homologarse el acuerdo.

El deudor deberá hacer pública su propuesta presentando la misma en el expediente con una anticipación no menor a veinte días del vencimiento del plazo de exclusividad. Si no lo hiciere será declarado en quiebra, excepto en el caso de los supuestos especiales contemplados en el artículo 48.

El deudor podrá presentar modificaciones a su propuesta original hasta el momento de celebrarse la junta informativa prevista en el artículo 45, penúltimo párrafo.

Art. 2° – Derógase el artículo 3° de la ley 25.563 y restablécese el texto del artículo 49 de la ley 24.522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 49: *Existencia de acuerdo.* Dentro de los tres (3) días de presentadas las conformidades correspondientes, por parte del deudor, dentro del período de exclusividad, o por los acreedores y terceros en los casos del artículo 48, inciso 3, el juez dictará resolución, haciendo saber la existencia de acuerdo preventivo.

Art. 3° – Derógase el artículo 4° de la ley 25.563 y restablécese el texto del inciso 5 del artículo 50 de la ley 24.522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 50: *Impugnación.* Los acreedores con derecho a voto, y quienes hubieren deducido incidente, por no haberse presentado en término, o por no haber sido admitidos sus créditos quirografarios, pueden impugnar el acuerdo, dentro del plazo de cinco (5) días siguiente a que quede notificada por ministerio de la ley la resolución del artículo 49.

Causales. La impugnación solamente puede fundarse en:

1. Error en cómputo de la mayoría necesaria.
2. Falta de representación de acreedores que concurran a formar mayoría en las categorías.
3. Exageración fraudulenta del pasivo.
4. Ocultación o exageración fraudulenta del activo.
5. Inobservancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo. Esta causal sólo puede invocarse por parte de acreedores que no hubieren presentado conformidad a las propuestas del deudor, de los acreedores o de terceros.

Art. 4° – Derógase el artículo 5° de la ley 25.563 y restablécese el texto del artículo 51 de la ley 24.522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 51: *Resolución.* Tramitada la impugnación, si el juez la estima procedente, en la resolución que dicte debe declarar la quiebra. Si se tratara de sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones y aquellas en que tenga participación el Estado nacional, provincial o municipal, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 48, salvo que la impugnación se hubiere deducido contra una propuesta hecha por aplicación de este procedimiento.

Si la juzga improcedente, debe proceder a la homologación del acuerdo.

Ambas decisiones son apelables, al solo efecto devolutivo; en el primer caso, por el concursado y en el segundo por el acreedor impugnante.

Art. 5° – Derógase el artículo 6° de la ley 25.563 y restablécese el texto del artículo 53 de la

ley 24.522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 53: Medidas para la ejecución. La resolución que homologue el acuerdo debe disponer las medidas judiciales necesarias para su cumplimiento.

Si consistiese en la reorganización de la sociedad deudora o en la constitución de sociedad con los acreedores, o con alguno de ellos, el juez debe disponer las medidas conducentes a su formalización y fijar plazo para su ejecución, salvo lo dispuesto en el acuerdo.

En el caso previsto en el artículo 48, inciso 4, la resolución homologatoria dispondrá la transferencia de las participaciones societarias o accionarias de la sociedad deudora al ofertante, debiendo éste depositar judicialmente a la orden del juzgado interviniente el precio de la adquisición, dentro de los tres días de notificada la homologación por ministerio de la ley. A tal efecto, la suma depositada en garantía en los términos del artículo 48, inciso 4, se computará como suma integrante del precio. Dicho depósito quedará a disposición de los socios o accionistas, quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte del juzgado.

Si el acreedor o tercero no depositare el precio de la adquisición el plazo previsto, el juez declarará la quiebra, perdiendo el acreedor o tercero el depósito efectuado, el cual se afectará como parte integrante del activo del concurso.

Art. 6º – Derógase el artículo 7º de la ley 25.563 y restablécese el texto del artículo 55 de la ley 24.522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 55: Novación. En todos los casos, el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Esta novación no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios.

Art. 7º – Modifícase el artículo 8º de la ley 25.563, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 8º: A partir del 30 de junio del 2002 se reanudan, en todos los procesos concursales presentados con anterioridad y regidos por la ley 24.522 y sus modificaciones, que se encuentren en el período de exclusividad, los plazos procesales de la ley 24.522.

Art. 8º – Derógase el artículo 9º de la ley 25.563.

Art. 9º – El plazo establecido por el artículo 10 de la ley 25.563, concluye el día 30 de junio de 2002. A partir de esa fecha se reanudan los plazos que hubieran sido afectados por esa norma.

Art. 10. – Derógase el artículo 11 de la ley 25.563.

Art. 11. – Derógase el artículo 15 de la ley 25.563.

Art. 12. – Modifícase el artículo 16 de la ley 25.563, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 16: Se suspenden por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la vigencia de la presente:

- a) Los actos de subasta de inmuebles en los que se encuentre la vivienda del deudor o sobre bienes afectados por él a la producción, comercio o prestación de servicios, decretadas en juicios ejecutivos o en ejecuciones extrajudiciales. Exceptúanse de esta disposición los créditos de naturaleza alimentaria, los derivados de la responsabilidad por la comisión de delitos penales, los laborales, los causados en la responsabilidad civil y contra las empresas aseguradoras que hayan asegurado la responsabilidad civil, los de causa posterior a la entrada en vigencia de esta ley y la liquidación de bienes en la quiebra;
- b) La ejecución de medidas cautelares que importen el desapoderamiento de bienes

afectados a la actividad de establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesiten para su funcionamiento.

Art. 13. – Derógase el artículo 21 de la ley 25.563 y restablécese el texto del artículo 48 de la ley 24.522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 48: *Supuestos especiales.* En el caso de sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, sociedades cooperativas, y aquellas sociedades en que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte, con exclusión de las personas reguladas por las leyes 20.091, 20.321, 24.241 y las excluidas por leyes especiales, vencido el plazo de exclusividad sin que el deudor hubiere obtenido las conformidades previstas para el acuerdo preventivo, no se declarará la quiebra, sino que:

- 1) Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas el juez dispondrá por el plazo de cinco (5) días la apertura de un registro en el expediente para que los acreedores y terceros interesados en la adquisición de la empresa en marcha, a través de la adquisición de las cuotas o acciones representativas del capital social de la concursada, se inscriban a efectos de formular ofertas. En dicha resolución, tomando en cuenta el informe general del síndico y las observaciones que hubiere merecido, fijará el valor patrimonial de la empresa, según registros contables. Asimismo, designará a la institución o experto que procederá al cálculo del valor presente de los créditos a los efectos del inciso 4), y se fijará la fecha de la audiencia informativa para que se lleve a cabo con cinco días de anticipación al vencimiento del plazo previsto en el inciso 3).
- 2) Si transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior, no hubiera ningún inscrito, el juez declarará la quiebra.
- 3) Si dentro del plazo previsto en el inciso 1) se inscribieran interesados, éstos quedarán habilitados por el plazo de diez (10) días, contados a partir del vencimiento del plazo de inscripción, para presentar en el expediente propuestas de acuerdo a los acreedores, manteniendo las categorías predeterminadas, o modificándolas. Dichas propuestas podrán ser modificadas sólo en dos oportunidades: a los diez (10), y a los veinte (20) días de su presentación. Vencido dicho plazo, quedará firme la última propuesta presentada por cada inscrito, quienes no podrán ya alterarlas.

Dentro de los siguientes veinte (20) días contados a partir de que queden firmes las propuestas, los interesados deberán obtener la conformidad de los acreedores verificados con los porcentajes de acreedores y de capital previstos en el artículo 45, párrafo primero.

Con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del plazo, se celebrará una audiencia informativa con la presencia del juez, el secretario, el deudor y los acreedores y terceros inscriptos en el registro previsto en el inciso 1) el comité provisorio de acreedores, y los acreedores que deseen concurrir. En dicha audiencia, los registrados informarán la marcha de las negociaciones y los asistentes podrán formular preguntas y solicitar información.

Si con anterioridad al día de la audiencia alguno de los inscriptos hubiere obtenido las conformidades previstas en el inciso 4) y lo hubiera hecho saber al juzgado, la audiencia no se llevará a cabo.

- 4) El primero de los registrados que obteniendo las conformidades previstas en el inciso anterior, documentadas en forma escrita, con firmas certificadas por escribano público, autoridad judicial, o administrativa –en el caso de entes nacionales, provinciales o municipales–, lo comunicará al juzgado con acompañamiento del texto de las propuestas, adquiere el derecho, en caso que el

acuerdo fuere homologado, a que le sea transferida la totalidad de la participación que los socios o accionistas poseen en la sociedad deudora, por un valor que no puede ser inferior al fijado por el juez en la resolución prevista por el inciso 1), reducido en la misma proporción en que lo fuere el pasivo verificado y declarado admisible tomado a valor presente, considerando las modalidades del acuerdo comprendidas en las propuestas formuladas y conformadas. A fin de determinar el valor presente de los créditos, se tomará en consideración la tasa de interés contractual de los créditos, la tasa de interés vigente en el mercado argentino e internacional, y la posición relativa de riesgo de la empresa concursada, teniendo en cuenta su situación específica. Al monto de los pasivos computables se le adicionará un monto adicional del dos y medio por ciento como estimación para los gastos y costas del concurso, a los efectos del cálculo. El cálculo del valor presente de los créditos será determinado, en relación con la propuesta, por la institución o experto designado por el juez. Esta estimación será irrevisable a los efectos de dicho cálculo, independientemente de la regulación de honorarios que oportunamente se practique. Para el caso en que la propuesta de adquisición de la participación societaria fuera inferior al valor determinado por el juez, reducido en la forma indicada, y con la previsión de gastos y costas adicionada al pasivo, se requerirá acreditar junto con las conformidades de los acreedores, la conformidad de socios o accionistas que representen la mayoría absoluta de socios o accionistas y las dos terceras partes del capital social de la sociedad deudora.

Para el procedimiento descripto los acreedores verificados y declarados admisibles podrán otorgar conformidad a más de una propuesta.

Juntamente con la comunicación de las conformidades el acreedor o tercero deberá depositar en el banco de depósitos judiciales, a la orden del juzgado un importe equivalente al veinticinco por ciento del valor de la oferta con carácter de garantía de propuesta.

- 5) Vencido el plazo previsto en el inciso 3), sin que alguno de los interesados haya podido obtener las conformidades correspondientes y hubiere efectuado el depósito previsto en el inciso anterior, el juez declarará la quiebra.

Art. 14. – Modifícase el artículo 52 de la ley 24.522, el que queda redactado de la siguiente forma:

Artículo 52: Homologación. No deducidas las impugnaciones en término, o al rechazar las interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación del acuerdo:

- 1) Si considera una única propuesta debe homologarla, salvo que la encuentre contraria al orden público o a la moral, o en fraude a la ley.
- 2) Si considera más de una propuesta, en el caso del artículo 48, debe homologar la primera que hubiera obtenido las conformidades.
- 3) Cuando una propuesta no haya obtenido la conformidad de la totalidad de las clases, el juez puede homologarla e imponerla a una o más clases, en los supuestos que:
 - a) Habiéndose conseguido la conformidad de una o más clases de acreedores quirografarios, cuando el acuerdo ha obtenido, en su conjunto, las conformidades de dos terceras partes del capital quirografario;
 - b) En todos los casos, cuando el juez considera que el acuerdo es equitativo y que no discrimina irrazonablemente contra la clase o categoría en la que no se logró conformidad suficiente.

El juez no puede utilizar la facultad de este inciso para imponer una propuesta

a acreedores con privilegio especial que no la hayan aceptado.

4) Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51, tercer párrafo, las resoluciones dictadas de conformidad a lo dispuesto en los incisos precedentes, son apelables. La no homologación sólo produce la quiebra cuando se halle firme. El juez decide entretanto lo que considera apropiado respecto de la administración.

Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Eduardo A. Duhalde.

Jorge M. Capitanich. – Jorge R. Vanossi.

–A las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

II

DIPUTADOS